

Los embates por la paz: historia de los diálogos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur con los grupos guerrilleros, Colombia*

María Jimena Padilla Berrío**

Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Los diálogos de paz que se llevaron a cabo entre diversos grupos guerrilleros y el gobierno de Belisario Betancur marcaron la historia y sentaron un precedente jamás antes visto, gobierno e insurgentes sentados en la misma mesa dialogando sobre la paz. Estos diálogos terminaron siendo polémicos en la medida en que se tildaron de fracasados, mientras que los distintos actores buscaron desesperadamente salvar su responsabilidad, más allá del alto costo que tuvo que pagar la sociedad civil en medio de este conflicto. No obstante, este escenario sentó las bases para una concertación política que más adelante haría posible la promulgación de la Carta Política de 1991 donde participaron excombatientes del Movimiento 19 de abril (M-19), diversos sectores de la sociedad antes excluidos —mujeres, indígenas y afrodescendientes— y los partidos políticos tradicionales. De esta manera, se busca indagar por el papel que tuvo la sociedad civil, el gobierno, las fuerzas militares y los insurgentes, mientras se llevaban a cabo los diálogos, es importante para entender el fracaso o éxito que puede atribuírsele a este suceso.

Palabras clave: guerrillas, fuerzas militares, Colombia (Thesaurus); Belisario Betancur, ley de amnistía, ley de indulto, M-19, FARC (Autor).

***Artículo recibido:** 17 de octubre de 2017 / **Aceptado:** 27 de noviembre de 2017 / **Modificado:** 19 de diciembre de 2017. El artículo es resultado del proyecto de investigación “Discursos y representaciones de la guerra y la paz en Colombia 1974-2006”, dirigido por el Doctor Renzo Ramírez Bacca, profesor titular e investigador senior del Grupo de Investigación “Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura” de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia).

**Abogada por la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) y candidata a Magister en Historia por la Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia). Pertenece al grupo de investigación “Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura” y “Estudios en Política y Guerra”. Participó como asistente de investigación del proyecto “Discursos y representaciones de la guerra y la paz en Colombia 1974-2006”. Correo electrónico: mjpgadill@unal.edu.co  <https://orcid.org/0000-0002-9912-565X>

Attempts at Peace: History of the Peace Dialogues with Guerrilla Groups during the Government of Belisario Betancur, Colombia

Abstract

The peace dialogues undertaken by different guerrilla groups and the government of Belisario Betancur marked history and set a precedent never seen before: government and insurgent groups sitting at the same table to talk about peace. These dialogues became controversial as they were deemed a failure, while different actors tried desperately to safeguard their responsibility, glossing over the high costs that the civil society, in the middle of the conflict, had to pay. Nonetheless, this scenario laid the foundations of a political concertation that would make possible, at a later stage, the promulgation of the 1991 Constitution, with the participation of former *Movimiento 19 de abril (M-19)* fighters, of previously excluded sectors of society –women, afro-descendant and indigenous groups-, and of traditional political parties. In that way, we wish to explore the roles played by the civil society, the government, the military forces, and the insurgents while the peace dialogues took place. This is important to understand the failure or success attributed to this event.

Keywords: guerrillas, military forces, Colombia (Thesaurus); Belisario Betancur, amnesty law, reprieve law, M-19, FARC (Author).

Introducción

Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia. (Litto Nebbia)

Las negociaciones del gobierno con los diversos grupos guerrilleros en el período presidencial de Belisario Betancur marcó la historia del país, no solamente porque fue la primera vez que un gobierno se sentó a escuchar y no a imponer condiciones, sino también porque aún hoy cuando se rememoran aquellos días la sensación es de zozobra, escepticismo y desconfianza. Por tales razones, todavía queda la impresión de que aún existen heridas abiertas y otras grietas que no cierran del todo en el conflicto colombiano. Dicho esto, el presente artículo analiza distintos momentos de los diálogos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, evidenciando el rol de los diversos sectores que participaron en el proceso.

En un primer momento se aborda el papel del gobierno central, haciendo una breve contextualización, donde se expone el escenario político y social en el que se encontraba

inmerso el país cuando Belisario Betancur asume la Presidencia de la República de Colombia. En este mismo sentido se muestra, a grandes rasgos, las intenciones del gobierno con respecto a temas puntuales como la erradicación de la pobreza y la búsqueda desesperada de una paz negociada. Posteriormente, se hace mención a las polémicas suscitadas alrededor de la Ley de Amnistía y los altercados que se presentaron entre el gobierno y el ejército, también se resalta cierto ambiente de indisposición política por parte de algunos sectores del mismo gobierno.

Un segundo aspecto tratado, se relaciona con el papel de las guerrillas dentro de los diálogos, se destaca la importancia de diferenciar los grupos guerrilleros, pues no obraban conjuntamente, ni tenían el mismo discurso político, aunque coincidían en la reivindicación de la igualdad y la justicia social. El desarrollo de esta parte se centra en las propuestas de algunos grupos guerrilleros, los acercamientos que se dieron y las polémicas alrededor de la violación de acuerdos, se resalta la tensión con el Ejército y los señalamientos constantes al gobierno por el desinterés que, según los actores armados, mostró para con los diálogos.

En un tercer momento se aborda el rol de las fuerzas militares dentro de toda esta polémica, pues, su papel fue protagónico y, en muchas ocasiones, determinante. Se mencionan así, aspectos como los enfrentamientos con el gobierno a la hora de acatar las órdenes relacionadas con no atacar a los grupos guerrilleros. Un aspecto que se desarrolla en este acápite es el de las limitaciones a las que se enfrentaba el ejército bajo el mando de Belisario Betancur, las cuales distaban mucho de las libertades que gozaron en otrora, bajo el gobierno de Turbay.

Por último, se analizan algunos relatos periodísticos de la época, relacionados con el tema de los diálogos de paz, los tropiezos del gobierno con las fuerzas militares y, sobre todo, la situación de orden público que atravesaba el país para entonces, siendo importante el contexto social en tanto la prensa dejaba ver la ola de secuestros, asesinatos y delincuencia común que azotaba al país para entonces, incidiendo en las negociaciones con los insurgentes, toda vez que los responsabilizaban de crímenes y brotes de violencia. Seguidamente y muy ligado al tópico anterior se aborda, *grosso modo*, el papel de la población civil. La cual hizo las veces de juez durante estos diálogos, pese a que su participación real fue pasiva en tanto podría verse como mera espectadora. Finalmente, se exponen una serie de consideraciones generales, tratando de hacer un balance general sobre las distintas situaciones que acompañaron los diálogos de paz.

El gobierno de Colombia

Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna ¡A esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! (Betancur, 1982)

A finales del período de Turbay, los candidatos presidenciales identificaron que el tema de la paz causaba profundas sensibilidades dentro de la sociedad por lo que quisieron quitarle el protagonismo al M-19 que era el grupo que entonces ostentaba como el embajador de la paz¹, señalando al gobierno de represor, por ello, fue Belisario quien mejor representó el sentir nacional, siendo asemejado a un populista (B.B. ¿Se espera demasiado?, 1982).

La campaña electoral con la que se lanzó Belisario Betancur tras el desgaste del gobierno beligerante de su predecesor hizo énfasis en dos problemáticas que, desde su óptica, eran apremiantes: la pobreza y el conflicto armado. De esta forma, Belisario llegó a la Presidencia de la República proponiendo políticas que iban en contra de los lineamientos del partido político Conservador que le dio el aval, encabezado por Misael Pastrana y Álvaro Gómez, quienes defendían la acción armada como forma de acabar el conflicto, diferente a la propuesta pacificadora de Betancur que incluía negociaciones y diálogos con los diferentes actores armados (Cámara de Representantes, f. 31).

Para atacar el primer pilar, la pobreza, su gobierno se centró en recuperar zonas afectadas por la violencia y en mejorar el nivel de vida de las personas pobres mediante un plan de vivienda sin cuota inicial. Por otro lado, para acabar con el conflicto propuso crear una concertación política mediante la apertura del régimen político² y mesas de diálogo con los diversos grupos armados. Bajo estas circunstancias, su discurso pacificador contó con un gran respaldo nacional, básicamente por el desgaste del discurso beligerante de su predecesor, lo que condujo a que gran parte de la población civil lo apoyara (Afanador, 1993, p. 88).

De esta forma, a escasos días de tomar posesión, el gobierno se embarcó en la tarea de estudiar a fondo la propuesta de paz hecha por el M-19 (La propuesta de paz

1. Para cuando finalizó el período Turbay, la imagen de favorabilidad del M-19 estaba en el 85% (Velásquez, 2011, p. 8).

2. Regulación del bipartidismo exacerbado que se había afianzado a partir del Frente Nacional, creando exclusión política, creando también el estatuto de oposición.

del M-19 a estudio de Betancur, 1982)³, en la cual el grupo guerrillero destaca su disposición a dialogar, sin embargo dejó en claro que en ningún momento la intención fue rendirse. Así, en medio de este pronunciamiento, el M-19 emitió su juicio con respecto a la paz, dando a entender que la paz “son libertades políticas, respeto a la vida de los luchadores populares. Es la participación del pueblo en las riquezas nacionales, es una política social que cubra las inmensas necesidades del pueblo de pan, techo, trabajo, educación y salud” (La propuesta de paz del M-19 a estudio de Betancur, 1982). Por ello, el grupo guerrillero hizo un llamado a todos los estamentos de la sociedad⁴ a un diálogo nacional donde se lograra un acuerdo que condujera a la paz. Posteriormente se conocerían las reuniones que estaba sosteniendo el gobierno con las FARC, situación que generó confianza entre la población en tanto los acercamientos con los insurgentes eran una muestra de verdadera intención de paz (Morales, 1991, p. 14).

Dadas estas circunstancias, una vez Belisario Betancur asumió la Presidencia de la República convocó a una Cumbre Política Multipartidista (Murcia, 1982a) con miras a diseñar un proyecto donde se plantearan temas como la institucionalización y el financiamiento de los partidos políticos junto con el estatuto de la oposición, la modernización de la Registraduría Nacional y el Sistema Electoral, el control financiero de las campañas electorales, la creación de espacios de participación ciudadana, la elección popular de alcaldes, entre otros asuntos relacionados. Sin embargo, las propuestas de Belisario no contaron con el respaldo de los Partidos Políticos tradicionales y fueron desaprobadas por un Congreso que no estaba de acuerdo con que se plantearan reformas sin su consentimiento⁵. En este sentido, el asunto de la paz parecía perderse en medio de los descontentos políticos y la crisis de los partidos políticos, que se parecía cada vez más a un tema personal del presidente en vez de una preocupación nacional.

No obstante, pese al empeño de Betancur en áreas como la ampliación democrática, la pobreza y la reforma institucional, la bandera de su gobierno se centró en la búsqueda de la paz con los diversos grupos guerrilleros, reconstituyendo la Comisión de Paz creada por el gobierno predecesor⁶, a la cual le atribuyó dos tareas fundamentales:

3. El 20 de agosto de 1982, a escasas dos semanas de posesionarse el primer mandatario, estaba en revisión la propuesta de paz hecha por el M-19 al alto gobierno.

4. La Iglesia, las fuerzas armadas, los partidos políticos, los distintos gremios, la sociedad civil y los diversos grupos guerrilleros fueron convocados por el M-19 en la propuesta inicial que le presentó al gobierno.

5. En parte, por las mismas divisiones existentes políticamente entre los mismo Partidos.

6. En el gobierno de Turbay se había creado una comisión de paz de 12 miembros mientras que Betancur la reanudó aprobando 36 en un comienzo, aumentándolo a 40 finalmente. No obstante, la Comisión fue criticada en principio porque, quizás, podía terminar siendo inoperante por numerosa (Murcia, 1982b).

dialogar con los diversos sectores sociales sin restricción alguna, y plantear escenarios al gobierno⁷ relacionados con el gasto público, la justicia, la seguridad, el desarrollo de las regiones marginadas, entre otros. De esta forma, el Presidente Betancur anuncia la reintegración y ampliación de la Comisión de Paz el 27 de agosto de 1982, a escasos 20 días de su posesión, con la misión de recoger y evaluar “los trabajos adelantados bajo el anterior gobierno [dialogando] con todos los sectores de la opinión nacional para explorar soluciones y salidas al conflicto” (Murcia, 1982c).

Sin embargo, el aspecto más grueso del tema de la paz, en ese momento, se centraba en el proyecto de Ley que se presentaría al Congreso buscando aprobar una amnistía⁸ que abriera el marco jurídico para negociar la paz con los diversos actores armados, pues, la inconformidad de quienes no veían con buenos ojos la concesión de “amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la presente Ley” (Ley 35 de 1982) comenzaba a sentirse, más aún después de aprobada, pues, su texto era ambiguo en algunos temas.

De esta forma, la Ley de Amnistía fue condenada al fracaso desde sus inicios, pues, las ambigüedades que la revestían podían ser un arma de doble filo en tanto podía detener la violencia desmedida de todos los actores armados en el conflicto o podía terminar en un fracaso total dando paso al recrudecimiento de la guerra. No obstante, pese a la politización del tema y al poco respaldo político con el que contó inicialmente el proyecto de Ley de Amnistía, el gobierno finalmente optó por apoyar el propuesto por Gerardo Molina en ese momento, pese a las ambigüedades que contenía, pues, por un lado no exigía la deposición de las armas a los movimientos guerrilleros pero aumentaba las penas a quienes tuvieran posesión ilegal de armas y, por otro lado, no se fijó territorio alguno como zona de resguardo para los guerrilleros mientras se daban los diálogos con la Comisión de Paz, lo que dejaba un vacío del cual las fuerzas armadas se aprovecharon, justificando sus incursiones armadas alegando que no existía prohibición alguna en un determinado territorio (Afanador, 1993, p. 93).

Además de la indisposición política para con el proyecto de amnistía⁹, estaba el factor económico en medio, pues, el presupuesto que debía destinarse para cubrir los programas que conducirían a la paz eran demasiado costosos, llevando a que se prioriza-

7. No en vano se le nombró “Comisión Asesora para la paz”.

8. La propuesta de Amnistía debía considerar el indulto de los guerrilleros, además, estaba sobre la mesa el debate de la excarcelación de los mismos como una forma de mostrar voluntad de paz por parte del gobierno.

9. Los choques políticos que tuvo Belisario Betancur, incluso antes de asumir oficialmente la Presidencia (*El Espectador*, 20 de julio de 1982), recibiendo la censura de los Liberales por la participación que el electo Presidente le daría en su gobierno a este Partido (*El Espectador*, 27 de julio de 1982).

ran unos aspectos sobre otros, generando cierto recelo entre la sociedad puesto que no miraban con buenos ojos que primaran temas como la adjudicación de créditos, vivienda y medios de subsistencia a desmovilizados, señalando de injusto el hecho de darle prevalencia a “delincuentes”. Sin embargo, no se trataba tanto de injusticia como de hacer viable la paz, pues, es entendible que para desmovilizar actores armados hay que brindarles los medios de subsistencia mientras se adaptan nuevamente a la vida civil.

No obstante, pese a las proyecciones optimistas el M-19 había manifestado –con anterioridad a la aprobación de la Ley– hacer un acuerdo sin condicionamiento de entrega de armas, en gran parte alegando que “en los últimos cuatro años han sido muertos 3000 de sus miembros” (El Espectador, 1 de noviembre de 1982). Lo que arrojaba los diálogos de cierto manto de zozobra y desconfianza desde los inicios, llevando a que posterior a la ejecución de la Ley y después de la liberación de muchos presos políticos, el M-19 optara por seguir armado, contrario a lo que el país esperaba. Quizás el problema no fue de falta de palabra tanto como de malos entendidos, pues, ni los insurgentes dijeron que iban a entregar las armas, ni que se iban a rendir, ni la Ley de Amnistía les prohibía portar armas. Así, las interpretaciones que algunos han dado al respecto quizás sean apresuradas en tanto estiman que el M-19 se aprovechó de las concesiones obtenidas (Afanador, 1993, p. 109), pues, a través del diario de los diálogos que nos presenta Restrepo (1986), hubo culpas desde los diversos frentes.

De esta forma, los diálogos de paz con los diversos grupos armados comenzaron su marcha un tanto incierta, ya no con simples dudas sino con opositores anónimos que después definiría Morales (1991) como “enemigos agazapados de la paz”. Por ello, en la lucha del Presidente por sacar adelante los diálogos declara en varias oportunidades que asume “todas las responsabilidades de la paz”¹⁰ (El Espectador, 6 de noviembre de 1982), dejando en claro que lucharía por ella, así fuera solo. Sin embargo, los problemas de información, de orden público y descontentos políticos se instalarían en los años posteriores del gobierno socavando no ya el proceso de paz solamente, sino también la institucionalidad misma del país, terminando en las cenizas del Palacio de Justicia todo el camino recorrido, dando al traste con la Ley 35 de 1982 y la Ley 45 de 1985, el acuerdo de la Uribe, el acuerdo de Corinto y un sinnúmero de reuniones en diferentes países del mundo. De ello, la renuncia del Ministro de Defensa a comienzos de 1984, los rumores de golpe de Estado, el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, aunado a los desórdenes sociales que se vivían por cuenta del secuestro, los asaltos armados a pueblos, entre otros, fueron

10. De hecho, esta expresión fue una respuesta, en su momento, a la Dirección Liberal Alterna que reparó un sinnúmero de veces en lo inviable que sería esta empresa, dejando por sentado su poco interés en el tema.

los aspectos que debilitaron paulatinamente los diálogos de paz. No obstante, el ambiente no volvió a ser el mismo después del 30 de abril de 1984, algunos afirman que este fue un punto de quiebre de los diálogos de paz (Afanador, 1993, p. 116), no tanto por la responsabilidad que pudieron o no haber tenido los grupos guerrilleros¹¹, sino por las medidas que implicó este suceso dentro del marco de los diálogos de paz: el estado de sitio.

Dicho lo anterior, es posible decir que el año de 1984 fue difícil para los diálogos, pese a que se lograron avances importantes en materia de acuerdos con distintos grupos guerrilleros¹², hubo grandes reveses y un cambio drástico del gobierno en materia política, no obstante, la racha de secuestros, la ola de violencia y la incertidumbre que se generó en 1983, sumado a los complejos problemas económicos que se dio en 1982¹³, hicieron inviable un gobierno que buscaba pacificar un país que llevaba más de tres décadas de violencia.

Pero, 1985 sería el más difícil de los años que habían precedido los diálogos, pues, el ambiente hostil que se respiraba, junto con las recurrentes quejas de los gremios económicos y la ola de secuestros que se había apoderado del país terminó por oscurecer el panorama y sepultar, paulatinamente, las esperanzas de quienes creían en una paz pactada. Sin embargo, el gobierno, en medio del escepticismo que empezaba a arroparlo, hace sus últimos esfuerzos por rescatar los diálogos sancionando la Ley 40 de 1985¹⁴ el 4 de junio, buscando oxigenar los acuerdos hasta el momento firmados, pero fue inútil, pues, en julio, un mes después de sancionada la Ley, el M-19 se toma Génova (Quindío, Colombia), alegando que el gobierno había incumplido los acuerdos.

Finalmente, el M-19 hace su aparición más estruendosa el 6 de noviembre de 1985 con la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”¹⁵ con la cual pretendía hacerle un juicio al gobierno por haber incumplido todas las promesas. Así, tras las

11. Este asesinato se le adjudica al narcotráfico (Cañón, 2010, p. 115).

12. Para ese año, el país confiaba más en un desarme de las FARC que del M-19, pues, precisamente por los roces que se dieron entre el gobierno y el M-19, la bandera de la paz ahora parecía tenerla el grupo guerrillero más antiguo y numeroso, las FARC. Así, el 30 de marzo de 1984 las FARC se comprometieron, en el denominado “acuerdo de la Uribe”, al cese al fuego a partir del 28 de mayo de ese mismo año, consignando también la creación de un partido político denominado la Unión Patriótica, el cual sería el canal para retornar a la legalidad. Así mismo, posterior a ello, en medio de un caótico encuentro, el M-19 firmaría un acuerdo de paz en Corinto en agosto de 1984. Como consecuencia de ello, otros grupos guerrilleros más pequeños como el Autodefensa Obrera (ADO), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se adhieren al acuerdo suscrito por el M-19, desatando conflictos internos entre los mismos grupos —el ELN se dividió—.

13. Que trascendieron por toda la década.

14. Denominada Ley de Indulto, la cual se plantearía, aunque no haya sido así al final, con unas exigencias más concretas como que el indulto vendría aparejado del desarme de los grupos armados junto con la verificación de los mismos (Archivo Personal Belisario Betancur (APBB), ABB 31, ff. 1-174).

15. Así denominó el operativo en el que se tomó el Palacio de Justicia.

cenizas del Palacio de Justicia se terminan de derrumbar los acuerdos que se habían hecho hasta entonces, se rompió definitivamente la comunicación cordial arrastrando consigo la desintegración de la Comisión de Paz en 1986, quedando el país sumido en una crisis política y de legitimidad que después se vería a través de los asesinatos de cuatro candidatos presidenciales y el exterminio de la UP¹⁶.

Las guerrillas

Hay un clima de paz en los medios políticos, pero la población sigue viviendo el terror. La población sigue viviendo el miedo, no sabe a qué horas le llega una patrulla militar a llevarse a sus hijos, o a llevarse las gallinas. A nosotros nos asalta la duda de muchos actos del presidente de la República. El estuvo aquí en el Caquetá, hace un mes más o menos inaugurando un proyecto de acción cívico-militar del Ejército. (Bateman habla, 1982)

Hablar de los grupos guerrilleros con los que el gobierno de Belisario se sentó a dialogar implica hacer una diferenciación, pues, no es posible hablar de las FARC en el mismo tono que del M-19, del EPL o del ADO, pues, pese a que hubo acercamientos con todos, el trato no fue el mismo y las acciones tampoco. Así, a la hora de hablar de los grupos guerrilleros es importante mirar el papel de cada uno para poder hacer un balance en conjunto de los diálogos. No obstante, las organizaciones guerrilleras fuertes de entonces, el M-19 y las FARC, se llevaron el protagonismo en las negociaciones, ignorando así los diversos grupos que en su momento silenciaron sus fusiles y mostraron disposición a hacer la paz (Molina, 1985, p. 13), siendo de algún modo injusto hablar del fracaso de estos diálogos en la medida en que hubo algunos avances.

Las negociaciones con el M-19 fueron, quizás, las más arduas que realizó el gobierno en su momento, pese a que no era el grupo guerrillero más grande¹⁷ pero sí el más fuerte discursivamente hablando, o más bien, el mejor estrategia político, no en vano fue la primera organización con la que se comenzaron los acercamientos, y el más polémico durante todo el período de negociaciones. Así, los ánimos se encendieron cuando el M-19 empuña las armas luego de haber quedado en libertad su órgano de dirección política tras la puesta en marcha de la polémica Ley de Amnistía.

16. Partido Político creado de las entrañas de los acuerdos con las FARC durante los diálogos con el gobierno de Belisario, exterminado paulatinamente a manos del Estado y los grupos de extrema derecha, conservándose en la impunidad esta tragedia aún (La impunidad en los crímenes contra la UP, 2011).

17. Hablando en término de número de integrantes, pues, el 80% de quienes representaban la guerrilla en general eran de las FARC (Afanador, 1993, p. 101).

En un principio el M-19 y las FARC suscribieron un acuerdo donde ambos se comprometían conjuntamente a negociar la paz, sin embargo, las FARC emprendieron una serie de negociaciones aparte, donde exigían, concretamente, cuatro puntos:

1. Que los diálogos se llevaran a cabo por territorios controlados por las FARC en el cual no hubiese presencia del Ejército¹⁸.
2. Se solicitó iniciar un proceso mediante el cual la guerrilla pudiera convertirse en movimientos agrarios y se puso sobre la mesa la actualización de la Ley de Amnistía.
3. Se buscó que las Fuerzas Militares fueran parte de los acuerdos que se suscribieran.
4. Finalmente, se puso sobre la mesa el inagotable tema de la Reforma Agraria, buscando que el gobierno la promoviera mediante la fijación de impuestos a latifundistas para reparar a víctimas de la violencia (Afanador, 1993, p. 104).

No obstante, pese a que la lucha del M-19 y las FARC era por la construcción de un país más justo, cada grupo tenía una óptica distinta. El M-19 pedía ampliación democrática, remodelación del sistema político, redistribución de la riqueza, educación, asuntos de nutrición, entre otros (Bateman habla, 1982); mientras que las FARC mantuvieron su posición de organización guerrillera agraria. Estas diferencias dejaban en evidencia los orígenes de cada grupo, aunque el M-19, además de las otras exigencias políticas, económicas y sociales también contemplaba la Reforma Agraria. Por su parte, otros grupos guerrilleros como el ADO proclamaban la “desaparición de la clase opresora” como condición para deponer las armas (Oficina del Alto Comisionado para la paz, 1998, p. 123), situación que, en el fondo, no distaba mucho de las anteriores. Al final, el común denominador entre los diversos grupos insurgentes fue el clamor por la igualdad.

Pese a la injerencia de distintos grupos guerrilleros, el protagonismo lo tuvo el M-19 de principio a fin, ya que con éste se iniciaron los diálogos, pero con el episodio del Palacio de Justicia se cerraron. Además, la credibilidad de los diálogos cojeó en más de una ocasión por cuenta de la imagen del M-19, un grupo que tenía el 85% de favorabilidad cuando se dio inicio a los diálogos y terminó con el 13% al cierre de los mismos (Velásquez, 2011, p. 8). Más allá de los enfrentamientos y la correspondencia, uno de los temas más polémicos estuvo ligado a la Ley de Amnistía, la cual, le dio una imagen de benevolencia al gobierno y desató la furia de muchos en contra de los insurgentes ya que dejar en libertad a miembros de esas organizaciones había sido un gesto que todos esperaban que

18. Se propone la Uribe (Meta, Colombia), donde se suscribirá el famoso e histórico “acuerdo de la Uribe” en marzo de 1984.

se respondiera con la deposición de las armas, lo que al principio parecía posible con la entrega de varios guerrilleros (Se entregan 27 guerrilleros del M-19, 1982). No obstante, sobre la misma base del entusiasmo nacional, tiempo después Jaime Bateman, comandante del M-19, daría una entrevista en la que dejaba en claro que no se acogían a una amnistía así como estaba planteada, en el papel, pues, había problemas graves aún que no habían sido resueltos ni iban a ser resueltos por la simple amnistía (Bateman habla, 1982).

Bajo este escenario, las intenciones de los alzados en armas han estado siempre en entredicho, pues, por un lado, como lo denuncia Eduardo Pizarro, a partir de 1980, después de la VII conferencia de las FARC, donde redireccionan el movimiento y replantean las tácticas de guerra, se observa un crecimiento vertiginoso de este grupo guerrillero (Pizarro, 2006). La importancia de este análisis radica en el hecho de que para esa época se iniciaron los acercamientos con el gobierno con miras a pactar la paz y declinar la subversión. Respuesta a ello, para las FARC en particular, fue la UP. Es contradictorio este episodio, lo que lleva a dudar sobre si realmente las FARC, con el cese de hostilidades, lo que buscaba era fortalecerse o de verdad declinar a la guerra.

Algunos acercamientos para responder esta duda pueden darse en una compilación de reportajes y documentos de Arenas (1990). En ciertos apartes se detallan momentos álgidos del proceso, dando a entender que sí están comprometidos, pero al mismo tiempo mantienen un discurso hostil frente a las distintas situaciones que se plantean, exigiendo, no sólo el papel y el formalismo, sino la realización efectiva de una serie de condiciones que debían cumplirse para pactar la paz. En cuanto al asunto del desarme también es tratado con reservas, pues, la desconfianza frente a las arremetidas del Ejército y las enseñanzas históricas no permiten “bajar la guardia” (Arenas, 1990). Dentro de las exigencias, la más acuciosa era la reforma agraria, prometida desde tiempos inmemoriales y en deuda aún hoy día.

El problema de la reforma agraria no es menor, si tenemos en cuenta que atraviesa toda nuestra historia y se encuentra suspendida en la mitad del conflicto. No es una exigencia nueva, ni el gobierno la contempla por primera vez. La importancia de este proyecto radica en los diversos intereses que se mueven alrededor de un tema tan complejo como éste, teniendo en cuenta que en este país la clase política —la encargada de direccionar estos asuntos— es juez y parte a la vez; es decir, son propietarios de grandes latifundios, por ende están en juego sus intereses particulares. El proyecto de reforma que intentó el gobierno en su momento, como pilar fundamental de la negociación, va a ser entorpecido desde las altas esferas, alegando, en algunas oportunidades, la inutilidad de una política de reestructuración de tierras, poniendo en entredicho los acuerdos, y demostrando cierta indisposición (Gros y Cusminsky, 1988).

Se resalta —bajo los distintos episodios de intentos de reforma agraria— cómo la oligarquía del país se pone de acuerdo, indistintamente de la orilla política a la que pertenezca, a la hora de imponer su dominación, dejando al descubierto que la legalidad y la legitimidad del estado colombiano son contradicciones con la naturaleza del sistema político tradicional que lo sustenta, pues, la marcada recurrencia a los estados de excepción que se vivieron en el país en la segunda mitad del siglo XX evidencian el desgaste de la estructura estatal, incapaz de funcionar basándose en sus instituciones vigentes (Valencia, 1986). Así, con relación a la amnistía, los ánimos pacificadores y la expectativa nacional, los problemas de orden público, que se agudizaban día tras día, iban dando cuenta del fracaso de los diálogos de paz y, en vez de acercarse más a la paz, cada día que pasaba el país tomaba más distancia de ella para caer en un vacío que lo dejó al borde del colapso, pues, la crisis política y de legitimidad tras la toma del Palacio de Justicia mostró un gobierno cansado, perdido, sin rumbo, a la vez que erigía a los insurgentes como los culpables del fracaso.

De esta forma, cuando por fin se firmó el acuerdo entre el gobierno y el M-19 nadie creyó nunca que pudiera ser viable, pues, lejos de producir la tranquilidad que se esperaba, mantuvo al país en vilo a raíz de un enfrentamiento desafortunado que hubo a última hora donde el dirigente Carlos Pizarro resultó herido (El Cuarto de hora de la paz, 1984), situación que denuncia Laura Restrepo y se atribuye, quizás, al miedo por la gran acogida del M-19 en el Hobo. El M-19 se pronunció en innumerables ocasiones señalando al gobierno de haber abandonado la causa de la paz, como lo hizo en los días finales, a mediados de 1985, con críticas a la Ley de indulto y la nueva actitud del gobierno frente a los diálogos de paz (APBB, F 24-2.). Por ello, lo que se dio en llamar paz durante este período se puede reducir a unos cuantos documentos firmados adquiriendo compromisos y derechos.

No obstante, pese a los desencuentros y al fracaso que se le atribuye a esta empresa pacificadora, es posible resaltar el éxito que alcanzó un engendro de este asunto, la Unión Patriótica, partido político que alcanzó cierta posición, para 1986 había logrado 23 alcaldías, 14 curules en el Congreso y contaba con 14 diputados a nivel departamental (Velásquez, 2011, p. 11), aunque los resultados posteriores relacionados con su exterminio, su persecución y declive sean materia de discusión y resultado, en parte, de las dificultades de llevar a feliz término los diálogos que dieron vida a este partido, pues, gracias a la ruptura abrupta de los acuerdos, la UP quedó desamparada tanto por las FARC como por el gobierno.

Las fuerzas militares

“No va a haber cese del fuego porque las Fuerzas Militares están cumpliendo con su deber y hay gentes tratando de cambiar el sistema político mediante la subversión, el asesinato, el secuestro y la emboscada”, palabras del General Fernando Landazábal con ocasión de los diálogos de paz del Gobierno de Belisario Betancur. (Velásquez, 2011, p. 11)

Las tensiones que hubo entre el gobierno y las fuerzas armadas con ocasión de los diálogos de paz que se adelantaban con los diversos grupos guerrilleros durante la presidencia de Betancur llegaron al punto de amenazar con un golpe de estado, el cual se rumoraba desde los pasillos del palacio presidencial hasta las selvas colombianas. Así, a la hora de repartir las responsabilidades sobre los tropiezos y desencuentros de este episodio, muchos han dado en señalar a las guerrillas (Afanador, 1993), otros lo han hecho señalando al gobierno (Restrepo, 1986), algunos han repartido responsabilidades entre gobierno y militares (Iragorri y Navarro, 2004), mientras que otros se han dado a la tarea de mostrar el ambiente que acompañó esta empresa (Santos, 1985).

De esta forma, el papel que desempeñaron los militares en este episodio es relevante en la medida en que existía, desde antaño, cierto recelo entre las fuerzas militares y las guerrillas, más concretamente el M-19, pues, el desafío que implicó el robo de las armas del Cantón Norte en 1978, el robo de la espada de Bolívar en 1974, la toma a la Embajada de República Dominicana en 1980, entre otros, profundizó los odios con el ejército, convirtiéndose en su mayor verdugo. De otro lado, uno de los choques más fuertes fue la interferencia del gobierno en la libertad de la que gozaban las fuerzas armadas Colombianas, sobre todo en el mandato de Turbay (Sanín, 1983), he ahí quizás los malos entendidos que evidencia Restrepo (1986) cuando, en ocasiones cita que el mismo Presidente desconocía las acciones del Ejército (Velásquez, 2011, p. 10).

Dicho lo anterior, era entendible la actitud de los militares cuando se mostraron en desacuerdo con los diálogos como mecanismo para alcanzar la paz, puesto que ellos concebían la vía armada como la más idónea. Así, las concesiones que se les dieron a los insurgentes no fueron vistas con buenos ojos por los militares. De hecho, la Uribe y Corinto fueron una afrenta para ellos, pues, no entendían cómo era que no podían intervenir militarmente en un determinado territorio concedido a los insurgentes (Velásquez, 2011, p. 10), entre otras cosas porque nunca les pareció que los grupos guerrilleros tuvieran intenciones reales de hacer la paz, según ellos, siempre conservaron la esperanza de alcanzar el poder¹⁹.

19. Quizás, el reconocimiento como actores políticos bajo el estatuto de seguridad llevó a que pensarán que el gobierno estaba debilitado en alguna manera y por esa razón había accedido a calificarlos como tal.

No obstante, pese a las diferencias entre militares y guerrilla, en varias ocasiones las fuerzas armadas expresaron su respaldo a los diálogos, aunque en la realidad no se configurara muchas veces, y es que para los militares el tema de la paz, los diálogos y acuerdos hacían parte de un proceso civil que adelantaba el gobierno con los insurgentes en las mesas de concertación, mientras que ellos consideraban que su papel continuaba siendo el de la seguridad y el orden público por la vía de la lucha armada, dejando entrever que nunca coincidieron las visiones de paz de ambos, lo que, de cierta manera, entorpeció el proceso en innumerables ocasiones (Velásquez, 2011, p. 10), como lo denuncia Restrepo (1986) a lo largo de su relato. Así, en medio de las contradicciones, los ánimos se calentaron al compás de los comunicados emitidos por el gobierno y los militares, pues, en varias ocasiones fueron contradictorios, llegando a convertirse en una afrenta en la medida en que el gobierno debió salir a desmentir comunicados de las fuerzas armadas que descalificaban los diálogos de paz, llevando esta situación a la renuncia del Ministro de Defensa.

El papel de la prensa en los diálogos de paz

En esta aspiración constante por la paz, la prensa debe vigilar que sus datos sean recibidos con respeto por el lector. De allí que debe extremar la vigilancia de su conducta interna. En algunos países, los medios tienen sistemas de controles propios —tres o cuatro directivos que gocen del respeto de sus colegas— para evaluar lo que se va a publicar. (Morales, 1991, p. 194)

Durante la época que se llevaron a cabo los diálogos de paz entre el gobierno de 1982-1986 con los distintos grupos guerrilleros, gran parte de la responsabilidad se le ha atribuido a la prensa, debido a que muchas veces fue confusa —quizás parcializada— lo que condujo a los repentinos cambios anímicos de la sociedad frente a la percepción de los diálogos. Así, en ocasiones se ha pensado que lo ideal sería “vigilar lo que se va a publicar”, como lo sostiene el expresidente de la Comisión de Paz Otto Morales (Morales, 1991, p. 194), para evitar malos entendidos y dispersión de la información, pero acaso, ¿no sería eso un límite a la libertad de prensa? y peor aún, un límite a la verdad, a la objetividad.

Con lo anterior, es menester aclarar que si bien la prensa mostró ambivalencias y dio pie a muchas ambigüedades en su momento, como lo denuncia Laura Restrepo —quien fue nombrada por Belisario Betancur para la Comisión de Negociación y Diálogo en 1982, era periodista de la Revista Semana— en un libro que recoge la historia más allá de las leyes y los decretos, asimismo narra el juego político de los dos lados de la mesa de negociación desde los lugares más inhóspitos y los detalles más sutiles (Restrepo, 1986). Sus reveladoras páginas cuentan con detalle los momentos más álgidos de la negociación,

quedando ella misma atrapada en el medio de los dos fuegos, pues, su papel de mediadora la ponía en ésta posición y le da autoridad para relatar lo que aconteció.

A lo largo de las páginas de este “diario de los diálogos de paz” se pueden recoger las ambigüedades, las confusiones, las “sinsalidas” que efectivamente tuvieron lugar durante esta época, llegando a la discusión de qué tanta responsabilidad pudo haber tenido la prensa cuando la realidad misma era confusa. De esta misma manera, la columna de opinión de Enrique Santos Calderón en el diario *El Tiempo*²⁰ recoge, a manera de síntesis, las distintas situaciones, los distintos episodios, las diversas problemáticas que se presentaron y la percepción de la población que, en un principio, sucumbió ante la esperanza de la tan anhelada paz y, con el transcurrir de los días, los hechos y las situaciones, iría dándose cuenta que el problema no era de leyes, no era de intenciones ni de palabras, era de resultados.

Santos Calderón recoge en un libro titulado *La guerra por la paz* una suerte de artículos publicados con ocasión de los diálogos del gobierno con los grupos guerrilleros, dejando entrever los momentos más álgidos de los diálogos, las problemáticas, las expectativas, las confusiones, mostrando ya no la parte íntima de los diálogos sino el estado general del país, el cual se encontraba en medio de un doble juego donde por un lado se batían las banderas de la paz, se firmaban acuerdos y se establecían leyes, y por otro se asistía a una ola de secuestros, asaltos, asesinatos y desmanes, sumado a una crisis económica que no daba tregua. A través de las páginas de este libro se pueden revivir los agites y las discusiones de aquella época, es el día a día de las negociaciones, qué se decía, cómo reaccionaban los distintos estamentos ante las distintas situaciones que se iban presentando. La posición que Santos Calderón ilustra de principio a fin está marcada, más que como un apoyo al gobierno de Belisario, como una visión objetiva de lo que sucede, dejando de lado las emociones y el sensacionalismo, para avocarse por la propuesta que, en el fondo, es lo que debería apoyar todo el país: la paz.

Como espectador y parte de estas negociaciones, Enrique Santos hace un análisis acertado de cada situación, denunció los hechos de la empresa del secuestro en la que se halla inmersa el país, expuso con preocupación el direccionamiento que estaban tomando las negociaciones, expuso los momentos más álgidos de ruptura que observa, señalando, de una manera acertada, las problemáticas que pudieron llevar a un recrudecimiento del conflicto. La prensa no era más que el reflejo del mismo caos en el que estaba sumido el país, aunque en ocasiones haya sido acusada de omitir la versión de quienes alzaron su voz para denunciar otra realidad, como ocurrió cuando el M-19 expuso “su verdad” en relación al altercado de Yarumales –vereda del municipio de Vista Hermosa– en diciembre de 1984, donde hubo un enfrentamiento entre

20. Estas fueron recopiladas en un libro que se tituló “La guerra por la paz”, donde da cuenta de su propia experiencia personal como parte en los diálogos con los distintos grupos guerrilleros (Santos, 1985).

los militares y el M-19 donde estos últimos resistieron por semanas la embestida de un asalto militar, cuatro meses después de haberse firmado el acuerdo de Corinto (APBB, F 24-2, p. 9).

Finalmente, a pesar de la incidencia que tuvo la prensa en la comunicación sobre el estado de los diálogos de paz, los problemas de fondo no tenían nada que ver con la prensa, más bien fue el fiel reflejo de los tropiezos internos. No obstante, pese a que no era dable coartar la libertad de prensa, era posible hacer unas negociaciones transparentes donde la prensa, por ser la protagonista de la información, estableciera puentes con el gobierno con miras a sostener la política de Estado, sin perder su independencia, era simplemente una coordinación. Es menester plantear a dónde se quiere llegar, cuál es la finalidad de la información y tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve, pues, en ocasiones la prensa fue ligera para denunciar asaltos y atentados, poniendo en aprietos los diálogos, como lo denunciaron las FARC en su momento ante Otto Morales (Morales, 1991, p. 48).

La población civil

Finalmente, en lo que atañe a la población civil, su percepción de los diálogos y las esperanzas puestas en el mismo, cabe resaltar que este sector de la sociedad está muy ligado a lo que la prensa evidencie en su día a día. Así, comenzando el gobierno de Belisario Betancur, el país vio nacer un proyecto amplio para concertar la paz que consistía, básicamente, en tres aspectos:

1. Amnistía mediante la Ley 35 de 1982.
2. Apertura democrática.
3. Conversaciones con las organizaciones guerrilleras (Medina y Sánchez, 2003, p. 173).

De los puntos anteriores, la población entendía que habría un acuerdo y por fin se lograría la paz. En un país acostumbrado a la guerra, la violencia, la sangre, es de esperar que sus habitantes mantengan sus esperanzas en la zozobra de sobrevivir día a día, y peor aún, sin comprender muy bien qué sucede. Además, frente a la hostilidad que había representado el gobierno de Turbay, el sentir nacional acompañaba la idea de los diálogos de paz. Desde entonces, la opinión de la población civil comenzó a perderse en medio del ir y venir de la prensa, tornándose confuso el asunto, reprochando cada actitud de los protagonistas, perdiéndose, en ocasiones, en el mismo ambiente internacional²¹, altamen-

21. Un aspecto importante a tener en cuenta es el relacionado con el escenario internacional que se vivía por aquella época. La Guerra Fría y los profundos odios con el comunismo alimentaban de cierta manera la visión respecto a los discursos comunistas de los diversos grupos guerrilleros, ello sin decir que quién imponía los lineamientos por aquel entonces era Reagan.

te hostil y beligerante para la época y los odios de quienes nunca quisieron ver prosperar este proyecto, los que Morales (1991, p. 101) llamó “los enemigos agazapados de la paz”.

Así, pese a que la población civil, en últimas, no era un actor importante dentro de este conflicto, fue una de las más afectadas en tanto a diario ponía los secuestros, los muertos, las angustias de una incertidumbre que, ni siquiera los mismos protagonistas, sabían a dónde llegarían. Es por ello que, en medio de los acontecimientos, Carlos Jiménez sostuvo en su momento que la opinión nacional naufragó en el inmediatismo, situación que generó un ambiente hostil a la hora de entender qué sucedía en esos momentos de conmoción social (Jiménez, 1985).

Conclusiones

Se puede afirmar que, a partir de lo que se evidencia en la prensa y las implicaciones que tuvo ésta dentro de los diálogos de paz, es posible notar que la información que se brindó con respecto a estas negociaciones fue bastante dispersa y, en muchas ocasiones, contradictoria. Es posible que haya habido sectores políticos, “los enemigos agazapados de la paz”²², que hayan manipulado los medios de comunicación a tal punto que lograron dispersar la información y generar el caos a partir de la incertidumbre que se derivaba de la misma, pues, a partir del diario de Restrepo (1986)²³ y el día a día de Enrique Santos, se puede observar cierta ambigüedad en la información, situación que pudo obedecer, en gran parte, al mismo estado de incertidumbre de las negociaciones. Ahora, siguiendo algunas denuncias que hace Santos en la recopilación de documentos de aquella época, la mala fe de quienes quisieron ver fracasar estos diálogos de paz se reflejó en más de una ocasión emitiendo apócrifos a nombre de las organizaciones guerrilleras, difundiendo información contradictoria, generando confusión, tratando de desprestigiar, de una u otra forma, los diálogos, sembrando desconfianza entre el gobierno y los distintos grupos guerrilleros.

Sin embargo, frente a las reacciones finales del gobierno en relación a su postura frente a los diálogos, es posible que los diversos grupos guerrilleros hayan faltado a su palabra en algún momento, desatando así la inconformidad del gobierno, o quizás fue el gobierno el que no entendió que no se trataba de un pulso de poder sino de un consenso, tal vez se creyó que era posible desmovilizar a las guerrillas a cambio de simples reivindicaciones individuales y no de grandes reformas como lo exigen en cada acuerdo que

22. Como lo tachó Otto Morales, el Presidente de la Comisión de Paz, en su carta de renuncia (Morales, 1991, p. 101).

23. Colombia, *historia de una traición* o, como lo titularía posteriormente, *historia de un entusiasmo*, es un relato del día a día de los diálogos, de las distintas conversaciones y los diferentes encuentros que tuvieron lugar en diferentes momentos, en fin, es una visión desde adentro, como parte de la Comisión de Paz, y desde afuera, como periodista.

firmaban. No obstante, existe la posibilidad, también, de que el gobierno haya cedido ante la presión de la población civil y el rechazo de diversos sectores políticos, o simplemente, como lo denunció el M-19 en varias ocasiones, haya sido engañado por el ejército.

De otro lado, la sensación que quedó –en general– y lo menciona Afanador (1993), es que Belisario Betancur abandonó la causa de la paz cuando se percató que la situación realmente se le salió de las manos, pues, el estado de orden público en que se hallaba el país se retrata con exactitud en las notas periodísticas de Enrique Santos y al pasar de las páginas de la Revista *Semana* y el Diario *El Espectador*, tras insistir una y otra vez en secuestros, extorsiones, asesinatos a lo largo de las líneas en las que recoge aquel período fatídico.

En lo que atañe a los diversos grupos guerrilleros, a partir de los diversos testimonios y los hechos, queda la impresión de haber sido el M-19 el protagonista de los diálogos, pues, los acercamientos con las FARC se hacen posteriormente, cuando el M-19 y el gobierno comienzan a tener tropiezos y no se llega a ningún entendimiento, quedando la sensación de que el gobierno buscó salvar la iniciativa de paz con las FARC, lo que tampoco se logró.

No obstante, pese a todos los tropiezos que tuvo este episodio, es posible rescatar algunos aspectos positivos como una ampliación democrática en la medida en que se modificó la elección de alcaldes, ya no eran nombrados directamente por la presidencia sino que eran sometidos a las urnas. Como segundo aspecto, se puede rescatar también que el trayecto recorrido fue la base de lo que más tarde sería la Asamblea Nacional Constituyente, precedida por la deposición de las armas del M-19 y otros pequeños grupos armados jalonados por ese sentir nacional de hacer un gran pacto que quedó reflejado en la Constitución Política de 1991 que aún hoy sigue vigente.

De otro lado, siguiendo una anotación de Medina y Sánchez (2003), quizás el problema final, en el fondo, sea el que persiste aún hoy en nuestra sociedad y no nos permite llegar a estadios coherentes donde sea posible pactar la paz; es decir, tal vez el problema de todo haya sido las contradicciones entre las políticas económicas que apuntaban a políticas neoliberales donde la injerencia del Estado es casi nula, en contraste con una política social planteada por los distintos voceros de los grupos guerrilleros, donde se pretendía mayor presencia estatal en las políticas públicas y menor poder para los grupos privados.

Finalmente, como lo señaló Enrique Santos Calderón, no se puede esperar que un país con una guerra endémica, que atraviesa toda su historia, haga la paz de la noche a la mañana. Por un lado, el gobierno no puede pretender arreglar la realidad con simple normatividad, por otro, la sociedad no puede pretender que las diferencias se arreglen por unas cuantas reuniones y, finalmente, los grupos guerrilleros no pueden esperar que se den a cabalidad los cambios profundos que exigen en cada uno de los encuentros que tuvieron con el gobierno (Santos, 1985, p. 33). Es importante, también, mantener los límites entre los diversos

grupos, pues, no todos mantuvieron la misma dinámica, así se evidencia cuando personajes como Gerardo Molina y Álvaro Leyva Durán hicieron un llamado, en su momento, a no confundir la paz con solamente un grupo como el M-19 (Leyva, 1985, p. 34), a no reducir el tema de la paz a lo que simplemente haga o deje de hacer el M-19 (Molina, 1985, p. 13).

Referencias

- Afanador Ulloa, M. A. (1993). *Amnistías e indultos, la historia reciente*. Bogotá: ESAP.
- Arenas, J. (1990). *Paz, amigos y enemigos*. Bogotá: La oveja negra.
- B.B. ¿Se espera demasiado? (6 de septiembre de 1982). *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/bb-espera-demasiado/63618-3.aspx>
- Bateman habla (27 de diciembre de 1982). *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/bateman-habla/1295-3>
- Betancur, B. (1982). *Discurso del Doctor Belisario Betancur al tomar posesión como Presidente de Colombia ante el Congreso*. Recuperado de <http://bibliotecapiloto.janium.net/janium/Documentos/BPP-D-BBC/BPP-D-BBC-0173.pdf>
- Cámara de Representantes. (S.f.). *Archivo personal de Belisario Betancur. Algunas consideraciones sobre el proceso de paz*. Medellín: BPP.
- Cañón, L. (2010). *El patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar*. Bogotá: Planeta.
- El Cuarto de hora de la paz (24 de septiembre de 1984). *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-cuarto-de-hora-de-la-paz/5709-3>
- Gros, C. y Cusminsky, R. (1988). Reforma agraria y proceso de paz en Colombia. *Revista Mexicana de Sociología*, 50 (1): 287-302. <http://dx.doi.org/10.2307/3540512>
- Iragorri, J. C. y Navarro Wolff, A. (2004). *Mi guerra es la paz*. Bogotá: Planeta.
- Jiménez Gómez, C. (1985). ¿Militarismo o subversión?: un falso dilema. *Arco. Revista del pensamiento colombiano*, 289, 39-43.
- La impunidad en los crímenes contra la UP. (13 de octubre de 2011). *Verdadabierta.com*. Recuperado de <http://verdadabierta.com/component/content/article/42-asesinatos-selectivos/3595-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-la-up>
- La propuesta de paz del M-19 a estudio de Betancur (20 de agosto de 1982). *El Espectador*. Ley N° 35 “por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz”. *Diario Oficial* 36133, Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 1982.
- Ley N° 49 “por la cual se concede una autorización al Presidente de la República, se regula el ejercicio de la facultad de conceder indultos y se dictan otras disposiciones”. *Diario Oficial* 37000, Bogotá, Colombia, 05 de junio de 1985.

- Leyva Durán, Á. (1985). Algunos apuntes sobre el proceso de paz. *Arco. Revista del pensamiento Colombiano*, 289, 33-38.
- Medina, M. y Sánchez, E. (2003). *Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Molina, G. (1985). ¿Paz impuesta o paz negociada? *Arco. Revista del pensamiento Colombiano*, 287, 13-16.
- Morales Benítez, O. (1991). *Papeles para la paz*. Bogotá: El árbol que piensa.
- Murcia, C. (13 de septiembre de 1982a). Expectativa por “cumbre política”. *El Espectador*, p. Portada.
- Murcia, C. (21 de septiembre de 1982b). La Comisión de Paz de 36 miembros “puede ser inoperante por numerosa”. *El Espectador*.
- Murcia, C. (27 de agosto de 1982c). Nueva Comisión de Paz. Betancur la reestructurará y ampliará. *El Espectador*, p. 10-A.
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (1998). *El proceso de paz en Colombia 1982-1994*. Tomo I. Bogotá: Oficina del Alto Comisionado para la paz.
- Pizarro Leongómez, E. (2006). Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En F. Gutiérrez, E. Wills y G. Sánchez (Coords.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp.171-208). Bogotá: Norma - Universidad Nacional de Colombia - IEPRI.
- Restrepo, L. (1986). *Colombia, historia de una traición*. Bogotá: Plaza & Janes.
- Sanín Fonnegra, J. (1983). De Turbay a Belisario: el cambio político. *Revista Javeriana*, 100 (497), 113-120.
- Santos Calderón, E. (1985). *La guerra por la paz*. Bogotá: CEREC.
- “Se entregan 27 guerrilleros del M-19”, (14 de septiembre de 1982). *El Espectador*.
- Valencia, E. (1986). La problematización de las armas. *Revista Mexicana de Sociología*, 48 (3): 103-126.
- Velásquez, C. A. (2011). Las Fuerzas Militares en la búsqueda de la paz con las FARC. *Serie Working papers FIP No. 7*. Recuperado de <https://www.files.ethz.ch/isn/151965/fuerzasmilitarespazweb.pdf>

Archivos

- Archivo Personal Belisario Betancur (APBB). Medellín, Colombia. Sala de Patrimonio Documental, Universidad EAFIT, 1979-1982.
- El Espectador*. Bogotá, Colombia, 1982.